

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 9º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-17133-2023
CARATULADO : AGUILÓ/CONSEJO DEFENSA

Santiago, dos de Agosto de dos mil veinticuatro

VISTOS:

En presentación de 4 de octubre de 2023 comparece doña María Alejandra Arriaza Donoso, abogada, domiciliada en calle Portugal N°333, torre 23, oficina 3, comuna de Santiago, en representación convencional de don SERGIO PATRICIO AGUILÓ MELO, ingeniero comercial, domiciliado en avenida Padre Hurtado N°2.096, comuna de La Reina, demandando en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, representado legalmente por don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, domiciliados en calle Agustinas N°1.225, piso 4, comuna de Santiago.

Indica que los hechos descritos en su demanda han sido reconocidos por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida también como Informe Valech. Posteriormente, se refiere a los aspectos principales de dicha comisión, señalando entre otros, su forma de trabajo y la cantidad de víctimas reconocidas por ella.

En cuanto a los hechos, señalado que el actor fue calificado como víctima en el listado de presos políticos y torturados elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, con el N°430.

Relata que el 4 de diciembre de 1981, alrededor de las 14:30 horas, en la intersección de avenida Bernardo O'Higgins con calle San Martín, comuna de Santiago, fue detenido por 2 individuos de civil que se movilizaban en 2 vehículos. Le vendaron los ojos, lo introdujeron en 1 de los vehículos y lo trasladaron a un lugar que no pudo reconocer pues tenía la vista tapada. Al llegar al lugar de detención, un sujeto que se identificó



Foja: 1

como integrante de la CNI le señaló que se encontraba en un lugar donde ningún poder llegaría, y que no tendría visitas. Su parte se enteró más tarde que era el Cuartel Borgoño.

Tenía estrictamente prohibido quitarse la venda de los ojos, pues de lo contrario sería asesinado en el acto. Solo le permitieron ver en 2 ocasiones: En la primera, le ordenaron mirar, y pudo reconocer a un sujeto apodado "el doc", Osvaldo Pincetti, quien intentó hipnotizar al demandante sin éxito. En la segunda, lo obligaron a observar a una persona desnuda y amarrada sobre un catre metálico. Se trataba de don Pablo Fuenzalida Zegers, integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presidida por don Jaime Castillo Velasco.

En aquel lugar, el demandante fue interrogado sobre sus actividades políticas (era dirigente de la Izquierda Cristiana) y como resultado, sufrió diferentes tipos de tortura. Esto incluyó la aplicación de corriente a través de un aparato que los torturadores llamaban "la picana", así como tormentos derivados del método denominado "la parrilla", que consistía en amarrarlo a un catre metálico, desnudo, y aplicar electricidad en diversas partes de su cuerpo. Sin embargo, al no obtener respuestas satisfactorias, en una ocasión trajeron una máquina que colocaron al costado derecho del catre, y le aplicaron descargas eléctricas aún más fuertes. La violencia fue tal que las amarras del lado derecho se rompieron y el actor cayó al otro lado de la cama.

En esa ocasión, debido a la aplicación de corriente, el demandante experimentó problemas respiratorios, y uno de sus torturadores tuvo que realizarle un masaje en el pecho.

Además de las descargas eléctricas, sufrió golpes en el rostro y amenazas de muerte contra su hija de 2 años. Los agentes de la CNI comenzaron a mostrarle fotos de niños que habían desaparecido a manos de los agentes como parte de estas amenazas. También se le amenazó con torturar a su cónyuge, señalándole que si no confesaba su participación en actividades políticas ilícitas, la conducirían al mismo lugar y le aplicarían electricidad en la parrilla.

En otra ocasión, lo condujeron a una sala en la que había un sillón acolchado de vinilo. Lo obligaron a sentarse y le amarraron los tobillos y las



Foja: 1

muñecas, iniciando un nuevo y brutal interrogatorio. El sillón producía fuertes descargas eléctricas, incluso más intensas que la parrilla y la otra máquina mencionada anteriormente. El demandante señala que la tortura en esa ocasión duró alrededor de 45 minutos, puesto que no pudo resistir más y se desvaneció.

Finalmente, fue obligado a posar ante una cámara de filmación con una ametralladora tipo AKA, junto a otros detenidos en el lugar. Esta operación se repitió en los últimos 2 días de su encierro en el recinto. También se le obligó a firmar distintas declaraciones, sufriendo nuevamente la aplicación de electricidad mediante "la picana" si se negaba a reconocer los documentos que se le exhibían.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 1981, fue llevado a la 2ª Fiscalía Militar donde fue interrogado, para luego estar en calidad de incomunicado durante aproximadamente 4 días. Más tarde, fue visitado por don Ignacio Walker, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, quien asumió su defensa y pudo constatar los efectos físicos de las torturas que había sufrido.

La Fiscalía Militar se declaró incompetente para conocer del delito que se le atribuía al demandante, por infracción a la ley que prohibía los partidos políticos. Los antecedentes fueron remitidos a la Corte de Apelaciones de Santiago, correspondiéndole la tramitación al ministro José Cánovas Robles, quien tomó conocimiento de las torturas a las que fue sometido.

Cabe destacar que durante la prisión política del demandante, su mal estado de salud, tanto físico como psicológico, fue constatado por doctores de Amnistía Internacional.

Fue encargado reo como presunto infractor al decreto ley 77 que prohibía la disidencia política pacífica, siendo enviado a la cárcel pública donde permaneció hasta el 23 de diciembre para luego ser recluido en la Penitenciaría de la cual salió, en libertad bajo fianza, el 8 de abril de 1982.

La Vicaría de la Solidaridad le proporcionó un médico psiquiatra para que pudiera realizar un tratamiento psicofarmacológico producto de la traumática experiencia sufrida y que marcó para siempre la vida del demandante.



Foja: 1

El 4 de junio de 2012 y tras varios años de investigación, fueron condenados 6 agentes de la CNI en calidad de autores y cómplices del delito de torturas en contra del actor, en proceso sustanciado ante el Ministro de Fiero Alejandro Solís Muñoz, bajo el ROL 6671-2005, la cual se encuentra firme o ejecutoriada.

Agrega que como consecuencia de la prisión política y torturas sufrida, el actor sufrió daño físico y psicológico a manos de agentes del Estado.

Cabe destacar que estuvo aproximadamente privado de su libertad 4 meses.

Estuvo 10 días siendo torturado por agentes de la CNI, fundamentalmente a través de golpizas y aplicación de corriente en pies, genitales y otras partes del cuerpo. Debido a lo anterior, presentó problemas respiratorios y al corazón. Los métodos de torturas fueron especialmente crueles, ya que los torturadores probaron distintas máquinas sobre su cuerpo, a fin de obligarlo a confesar un supuesto hecho ilícito.

También recibió tortura psicológica, pues le señalaban que, si no confesaba participar de actividades políticas ilícitas, matarían a su hija de dos años y torturarían a su cónyuge bajo las mismas condiciones sufridas por el demandante. Este tipo de tortura psicológica ocasionó un daño invaluable la psiquis del señor Aguiló, dejando huellas hasta el día de hoy.

En la actualidad es portador de estrés post traumático y cada cierto tiempo sufre pesadillas, o disminución del estado anímico, sobre todo en cuando se acercan la fecha de su detención.

En cuanto al derecho, indica que el demandante fue víctima de crímenes de lesa humanidad, graves y atentatorios contra los Derechos Humanos, según la definición contenida en el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998, el que cita.

En seguida, refiere los artículos 38 inciso 2°, 1 inciso 4°, 5 inciso 2° y 6 de la Constitución Política de la República, los que cita.

Agrega que se puede colegir que la acción indemnizatoria de autos tiene su origen en delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado, dado que fue el mismo Estado quien ordenó a sus agentes obtener información relevante para la seguridad nacional, sin embargo, estos



Foja: 1

hicieron abuso de aquella instrucción cometiendo crímenes de lesa humanidad, razón por la cual es responsable.

Refiere además el artículo 5 de la Constitución Política y el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Debe tenerse presente que no solo los tratados internacionales son fuente del Derecho Internacional, sino que también existen principios que rigen esta materia que pueden extraerse de otro tipo de fuentes, como por ejemplo, los que emanan de los órganos colegiados como la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el “Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad”, cuyo artículo 23 cita.

Además, es necesario tener especial consideración con lo que señala el artículo 27 de la Convención de Viena que dice que las partes no pueden invocar derecho interno para excusarse de cumplir con sus obligaciones internacionales.

En lo relativo a la imprescriptibilidad de la acción, señala que es el artículo 5 de la Constitución el que permite en Chile aplicar los tratados internacionales que obligan a reparar íntegramente los daños causados por violaciones a los Derechos Humanos, adquiriendo estos principios rango constitucional.

El pretender aplicar las reglas de prescripción establecidas en el Código Civil purgaría con la obligación del Estado de reparar íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo al artículo 27 de la Convención de Viena, vigente en Chile, si se aplicaran las normas de prescripción del Código Civil para no ser obligado el Estado a indemnizar el daño causado a las víctimas, haría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

Por otra parte, del artículo 63.1 de la Convención Sobre Derechos Humanos, ratificada y vigente en nuestro país, es manifiesta la obligación del Estado de indemnizar a las personas que sufrieron daños debido a las actuaciones de agentes estatales que causaron crímenes de lesa humanidad.



Foja: 1

Dicha obligación, en virtud del artículo 5 de la Constitución tiene carácter constitucional.

Lo anterior ha sido amparado por jurisprudencia de la Corte Suprema, según fallos que cita.

Solicita en definitiva: Se declare que el demandado debe pagar a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por el demandante, víctima de prisión política y tortura provocadas por agentes del Estado de Chile, la suma de \$200.000.000.-, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha de la interposición de la demanda y el pago efectivo, junto con los intereses legales correspondientes al mismo período, con costas.

En presentación de 10 de noviembre de 2023, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Opone en primer término la excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los derechos humanos se posicionan dentro de la llamada “justicia transicional”.

Agrega que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de la justicia por tantos años buscada. Lo anterior pues los procesos penales se concentran en el castigo a los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Desde la perspectiva del Estado, estas importan una compleja decisión de mover recursos económicos públicos desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos y este concurso de intereses se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación, los que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

En el caso chileno, el gobierno de Patricio Aylwin se abocó preferentemente a una serie de objetivos de justicia transicional, entre los



Foja: 1

cuales estaba la provisión de reparaciones para los afectados. La Comisión Rettig en dicho sentido propuso una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Su informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso y que derivó en la Ley N°19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en cuyo mensaje se consignó en términos generales que se buscaba “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

En lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el Ejecutivo siguiendo el Informe de la comisión, entendió por tal "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N°19.123 y las demás normas conexas (como la Ley N°19.992 referida a víctimas de tortura) han establecido distintos mecanismos mediante los cuales concretar esta compensación, exhibiendo cómo nuestro país ha afrontado el complejo escenario de justicia transicional.

Al efecto, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha hecho principalmente a través de tres tipos de compensación: transferencias directas de dinero; asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, simbólicas. Todas ellas buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En cuanto a las transferencias directas de dinero, estas se han establecido a través de diferentes leyes, las que han significado al Estado altos costos generales, los que detalla en cuanto a pensiones por Comisión Rettig y Comisión Valech, bonos, desahucio y bonos extraordinarios, las que a diciembre de 2019 significaron el desembolso por parte del Fisco de \$992.084.910.400.-



Foja: 1

Desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual también es una forma de reparar un perjuicio actual. La sucesión de pagos por la vida del beneficiario no obsta a que pueda ser valorizada para conocer su alto valor compensatorio. Estas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige, obteniéndose compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sobre las reparaciones específicas, da cuenta que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, individualizados en el “Listado de Prisiones Políticos y Torturados”, de la nómina de personas reconocidas como tales.

Adicionalmente, el actor recibió el aporte único de reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000.-

Además, se refiere a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, como por ejemplo, se concedió a los beneficiarios de la Ley N°19.234 como de la Ley N°19.992 el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país, el que cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva para sus beneficiarios, con un incremento presupuestario constante.

Se incluyeron además beneficios educacionales consistentes en la gratuidad de estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar para el ejercicio de este derecho la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, se concedieron subsidios para el acceso a la vivienda.

Asimismo, parte importante de la reparación por daño moral causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo, acciones que pretenden reparar a través de la satisfacción a las víctimas que en parte logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral.



Foja: 1

La doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente es dar a la víctima una ayuda o auxilio que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

En este sentido, se han ejecutado diversas obras de reparación simbólica: la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en 1993, el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el que se conmemora el 30 de agosto; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros que detalla.

De lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica nacional que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, morales y patrimoniales.

Por eso, las indemnizaciones solicitadas en autos y el cúmulo de reparaciones que aludió, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. No procede por tanto, compensar dichos daños nuevamente. Así se pronunció la Corte Suprema en el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, Rol 4.753-2001, lo que reiteró en fallo de 30 de enero de 2013.

Agrega que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos chilena, al punto de denegar otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos pagados por el Estado por pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Así por ejemplo en el Caso Almonacid con Chile.

Por su parte, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas, que no genere desigualdades. En igual sentido, Lira da cuenta de lo problemático de dar lugar nuevamente a demandas de indemnizaciones de perjuicios, lo que genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la



Foja: 1

decisión política y administrativa de reparación. El rechazo a estas pretensiones fortalece los programas de justicia transicional.

En segundo término, opone la excepción de prescripción extintiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el artículo 2497 del mismo texto.

Conforme al relato del actor, la detención ilegal y tortura ocurrió a contar del 4 de diciembre de 2023.

Entendiendo suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente transcurrió el plazo de prescripción de 4 años contemplados en la norma citada.

En subsidio, opone la excepción respecto del plazo de 5 años contemplado para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con crecer el plazo contemplado en la primera de dichas normas.

Agrega que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que no existe en este caso.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin texto constitucional o legal expreso, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil y en especial las de su Párrafo I que la consagran se han estimado siempre de aplicación general y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del Código Civil, que manda a aplicar estas normas de prescripción a favor y en contra del Estado.

Luego, cabe destacar que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad:



Foja: 1

resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Finalmente, añade que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil en cuanto a la prescripción. Lo habría si aquellos textos la prohibieran o si el derecho interno no admitiera la reparación judicial oportunamente formulado. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Posteriormente, refiere sentencia de unificación de jurisprudencia de demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, de 21 de enero de 2013, autos Rol 10.665-2011, en la cual se dispuso que:

- El principio general que debe regir en la materia es el de prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad como toda excepción, debe ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

- Los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, sino solo relativa a la responsabilidad penal.

- No existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que se representa en este caso por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, artículo 2332 que fija un plazo de 4 años desde la perpetración del acto.

- Que no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño.



Foja: 1

Sobre el contenido patrimonial de la acción indemnizatoria que se ejerce, agrega que se debe aplicar las normas del Código Civil sobre prescripción, dado que lo pretendido es el ejercicio de una acción que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado.

Aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que dicha acción sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, ninguno de los que la contraria cita contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíban la aplicación del derecho interno en esta materia, lo que ha sido reiterado por la Corte Suprema en los autos Rol 1.133-06, caratulados “Neiva Rivas, Gloria con Fisco de Chile”.

En consecuencia, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, no puede tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad en materia penal, por lo que debe rechazarse la demanda de autos, al encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de lo anterior, formula las siguientes alegaciones sobre la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido:

Sobre el daño moral, cabe considerar que este consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obran en autos en la etapa probatoria.

Los daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, su indemnización no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita



Foja: 1

atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Es en esta perspectiva que hay que regular el monto de la indemnización, que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

No resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar la cuantía de la indemnización.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del obligado al pago. Las cifras pretendidas en autos resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los tribunales en esta materia.

En subsidio, alega que en todo caso la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor, conforme a las leyes de reparación que señaló, que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, todos los que buscan reparar el daño moral.

De no accederse en estos términos, se produciría un doble pago por un mismo hecho.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en caso de que la sentencia que se dicte acoja la demanda y establezca esa obligación, además de que se encuentre firme y ejecutoriada. Con anterioridad a ello, ninguna obligación de indemnizar tiene su parte, por lo que no hay suma que deba reajustarse.

Sobre los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

En presentación de 15 de noviembre de 2023 la demandante evacuó la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y derecho expuestos.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva, agrega que las leyes de reparación establecieron pensiones y beneficios de carácter



Foja: 1

meramente asistencial, las que no son incompatibles con la indemnización que su parte reclama.

Tampoco puede pretenderse que el otorgamiento de las mismas haya reparado concreta y fehacientemente el daño causado, pues ello implicaría que el quantum del sufrimiento causado por agentes del Estado, estaría pre fijado en una ley y no sometido a la prudencia judicial para que evalúe las circunstancias del mismo, lo que sería contrario a cualquier Estado de Derecho. La misma jurisprudencia ha rechazado reiteradamente esta excepción, según fallos que cita.

Por otra parte, de aceptarse la tesis fiscal, con respecto a que las pensiones otorgadas por el Estado a las víctimas tuvieran el carácter indemnizatorio, estaríamos ante un caso en que es el victimario determinaría el valor de las indemnizaciones de manera unilateral, siendo imposible para las primeras discutirlos, cuestión contraria a los principios básicos del Derecho.

En relación a la excepción de prescripción extintiva, añade que la acción interpuesta no es meramente patrimonial sino que es una de reparación relacionada a crímenes de lesa humanidad, que debe ser analizada a la luz del derecho internacional, en virtud del artículo 5 inciso 2 de la Constitución, haciendo aplicables los artículos 1.1.y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 de la Convención de Viena, según explicó.

Por último, debe considerarse que el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber aplicado en el pasado la prescripción extintiva a acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad, concretamente dicho órgano declaró que había violado los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma convención, vulnerando el derecho de acceso a la justicia y a la protección judicial, en el caso Órdenes Guerra y otros con el Estado Chileno.

En presentación de 24 de noviembre de 2023 la demandada evacuó la réplica, reiterando en lo sustancial lo ya expuesto en su contestación.

Por resolución de 28 de noviembre de 2023 se recibió la causa a prueba.



Foja: 1

Por resolución de 13 de junio de 2024 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la detención ilegal y arbitraria y la tortura de personas ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad, esto es, están dirigidos a afectar la vida misma de las personas en su aspecto más básico y trascendente, del cual los países, entre los que se encuentra Chile, se han comprometido a evitar y, una vez producidos, sancionar. Siendo este caso de particular gravedad por cuanto no se encuentra discutido por la demandada que los demandantes han sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, cometidos por agentes del Estado.

SEGUNDO: Que a fin de acreditar su pretensión, el demandante acompañó la siguiente prueba documental:

- Capítulo VIII Consecuencia de la prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura.

- documento “Nómina de personas reconocidas como víctimas”, emitida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el cual se observa al actor, bajo el N°430.

- Ficha del actor de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, en la cual se observa sus datos principales a la época de los hechos de autos y en especial, de ser dirigente a la época de los hechos que narra del Partido Izquierda Cristiana como de haber sido detenido el 10 de diciembre de 1981, siendo liberado en abril de 1982. Se consignan igualmente los recintos en los cuales estuvo recluido: Cuartel Borgoño y la Penitenciaría, además de las torturas que alega haber sufrido.

- Sentencia definitiva dictada el 4 de junio de 2012 en los autos Rol 6.671-2015 que condena a quienes se indica por el delito contemplado en el artículo 150 del Código Penal cometido en contra de la persona de Sergio Aguiló Melo, perpetrado en diciembre de 1982.

- Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de 1 de septiembre de 2014, que confirma lo apelado de la mencionada anteriormente.



Foja: 1

- Sentencia de la Corte Suprema de 20 de abril de 2015 y copia de resolución de 25 de mayo de 2015, rechazando los recursos de casación deducidos en contra de la antes señalada.

- Informe médico legal N°1.520-05 del Servicio Médico Legal relativo al demandante, de 24 de marzo de 2005, de conformidad al cual este presente un trastorno por estrés postraumático en remisión parcial, que relaciona con la tortura sufrida el año 1981, que fue tratado y que a esa fecha presentaba síntomas leves que limitan su funcionamiento diario. Por otro lado, presenta un trastorno depresivo recurrente, a esa época asintomático, gracias al tratamiento antidepresivo que se automedica.

- Audiometría efectuada al actor el 4 de marzo de 2024 al demandante, de 71 años, que observa tinnitus ocasional en OI, negativo al examen.

- Certificado emitido por doña Gaby Rivera Sánchez, Presidenta y Representante Legal de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de 23 de abril de 2024, que da cuenta de haber recibido dicha organización los beneficios de reparación contemplados en las Leyes N°19.992 y 20.874 que correspondían al demandante, en su calidad de víctima de prisión política y tortura, desde el año 2005 a la fecha actual, por haberle sido cedido dicho derecho por aquel.

TERCERO: Que además arribó oficio ORD.: DSGT N°18.746/2024, de 8 de enero de 2024, emitido por don Alexander Suárez Olivares, Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, dando cuenta de los beneficios de reparación Leyes N°19.992 y 20.874 que ha recibido la demandante en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura.

Por su parte, arribó Resolución N°LV-209 de la Contraloría General de la República, de 14 de septiembre de 2007, que ordena el pago de la pensión que le fuera otorgada al actor como beneficiario de la Ley N°19.992, a la persona jurídica Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

CUARTO: Que de los documentos acompañados, como de lo relatado por el propio demandante, fluye que fue detenido ilegalmente por agentes estatales el 4 de diciembre de 1981, permaneciendo privado de



Foja: 1

libertad hasta abril de 1982, siendo recluido en el Cuartel Borgoño y posteriormente en la Penitenciaría, siendo sometido durante el primer período a crueles torturas físicas y psicológicas que le causaron gran daño, todo lo que redundó en graves secuelas emocionales, lo que ha sido reconocido por el propio Estado como violaciones a los Derechos Humanos, circunstancias por las cuales se le ha dado el carácter de víctima en documentos oficiales.

QUINTO: Que en cuanto a ser el actor beneficiaria de la Ley N°19.992 que les otorgan una pensión, en efecto esta y otras reparaciones “simbólicas”, son reparaciones satisfactivas que emanan de los Principios y Directrices fijados por las Naciones Unidas en el año 2005, como estándares mínimos de reparación en su aceptación genérica, que están dirigidos a dar cuenta de constricción pública y apoyo inmediato a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, pero que no quedan agotados allí, al punto, que incluso la Corte Interamericana ha sostenido que las reparaciones pecuniarias pueden ser reclamadas al Estado, no obstante haber sido dirigidas acciones contra los responsables directos, por lo que parece atendible que no pueda impedirse, en primer lugar, el ejercicio de la acción de indemnización por daño moral a los tribunales ordinarios de justicia, más aún si las transgresiones que han dado origen a la pretensión reparatoria, se realizaron como acción de plan de gobierno contra civiles.

SEXTO: Que por lo demás, en el caso específico de que se trata, tampoco ha sido demostrado por la demandada que haya sido compensado el daño presuntamente generado, ni siquiera por acciones generales, ya que el solo hecho de haberse realizado por el Estado obras de carácter universal, no conlleva necesariamente la mitigación individual de los afectados.

SÉPTIMO: Que también se ha señalado por la demandada que la acción indemnizatoria se encuentra prescrita, por cuanto la detención arbitraria y tortura tuvieron lugar en septiembre de 1973 y que aun cuando se estimara que el plazo debe contarse desde el retorno del gobierno democrático o desde el Informe de Verdad y Reconciliación, los 4 años que prescribe el artículo 2332 del Código Civil o incluso los 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo legal, habrían transcurrido largamente hasta la



Foja: 1

fecha de la notificación de la presente demanda civil, al Fisco de Chile, ocurrido el 11 de diciembre de 2023.

OCTAVO: Que lo anterior sería de este modo si se atendiera a las normas de derecho privado, ya que en efecto desde la mirada positivista de resguardo del derecho de propiedad y la libre circulación de los bienes, es decir, desde la protección patrimonial, tanto al Fisco como a los privados, deben ser tratados en igualdad de condiciones y aplicársele la institución de la prescripción para adquirir bienes y extinguir deudas. Así lo señaló el propio Bello en el Mensaje del Código Civil, cuando expresa “Innovaciones no menos favorables a la seguridad de las posesiones y al crédito encontraréis en el título De la Prescripción”.

NOVENO: Que, sin embargo lo indicado, Chile forma parte de una comunidad internacional que ha establecido no solamente establecer en los instrumentos internacionales que los rigen, un beneficio mutuo como Estados contratantes, sino con un objeto y fin determinado, cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independiente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción (...)”¹. Lo anterior implica establecer en la base del análisis y aplicación del concepto de responsabilidad a la víctima y al principio Pro Persona, esto es, debiendo “preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, independientemente si dicha norma se encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno”².

DÉCIMO: Que en efecto las Naciones Unidas aprobaron, en el año 2005, los Principios y Directrices relativos a los derechos de las víctimas en casos de violaciones a los Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, señalando que debe darse a las víctimas una reparación plena

¹ Corte IDH. OC-2/82, citado en Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash, pág. 12.

² Op. Cit, pág. 13, cita propia de ponencia en el Centro de Estudios Constitucionales Universidad de Talca, septiembre de 2012.



Foja: 1

y efectiva, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.

UNDÉCIMO: Que entonces el imperativo de protección y reparación en casos de violación a los derechos humanos emana del derecho internacional y es un principio del Derecho Internacional Público “aplicable directamente en el sistema normativo nacional frente al incumplimiento de obligaciones internacionales y posee una base normativa de rango superior a la ley civil”³.

DUODÉCIMO: Que la Constitución Política de la República en su artículo 5 inciso 2° señala que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

DÉCIMO TERCERO: Que los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental disponen el principio de legalidad de los actos estatales, estableciendo expresamente la nulidad de aquellos que se aparten del mandato constitucional -y por aplicación del artículo 5 de los Tratados Internacionales- generando responsabilidad y sanciones.

DÉCIMO CUARTO: Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, establece en su artículo 1 que estos “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

DÉCIMO QUINTO: Que a su vez el Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer

³ “Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash Rojas, Pág. 134.



Foja: 1

una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.”

A su vez, el artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.”

Y el artículo 131 establece “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

DÉCIMO SEXTO: Que la Convención Americana de los Derechos del Hombre en su artículo 1 prescribe que “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra



Foja: 1

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que por último, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que “Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

DÉCIMO OCTAVO: Que la obligación de reparación íntegra entonces emana de la aplicación preferente al derecho internacional de los Derechos Humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído y aplicar dichos tratados de buena fe⁴. Normas internacionales que son de “aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían aludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno y que invoca el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de los intereses fiscales (...)”⁵.

DÉCIMO NOVENO: Que en este caso se trata entonces de crímenes de lesa humanidad en que las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este caso, emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tiene rango supra legal, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya citado; sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas, por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad serán desestimadas.

VIGÉSIMO: Que conforme se ha probado y reconocido, las acciones delictuales fueron cometidas por agentes del Estado; siendo su actuar una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales de los artículos 6 y 7.

⁴ Op. Cit. Pág. 161

⁵ Caso Álvaro Corvalán Castilla con Fisco de Chile.



Foja: 1

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el artículo 38 de la Constitución Política de la República señala que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de la víctima, no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, solo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los apremios físicos y psicológicos infligidos al actor.

VIGÉSIMO TERCERO: Que la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido por el demandante.

VIGÉSIMO CUARTO: Que para acreditar el daño moral sufrido se tendrá en cuenta el informe médico legal N°1.520-05 de 24 de marzo de 2005, el que si bien data de hace más de 20 años, da cuenta de que el actor presentó un trastorno por estrés postraumático relacionado con las torturas que sufrió, como también un trastorno depresivo recurrente, como además, la circunstancia de haber sido aquel víctima reconocida por el Estado de Chile de Prisión Política y Tortura, de manera que es plausible presumir que las afectaciones físicas y emocionales sufridas producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado permanecen en él luego de más de 40 años de ocurridos los hechos.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que los hechos que causan el agravio han permanecido por largo tiempo y que alteraron el curso normal



Foja: 1

de su vida, al verse privado de libertad aproximadamente 4 meses, razón por la cual se le fijará prudencialmente en la suma de \$70.000.000.-, sin que ello aparezca que se trata de un enriquecimiento sin causa o un lucro improcedente, como pudiere alegar la demandada.

VIGÉSIMO SEXTO: Que las referidas cantidades ordenadas pagar, se hará con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, puesto que, en efecto, la obligación de indemnizar es declarada con la dictación de esta sentencia y el reajuste tiene como único objeto morigerar los efectos de la inflación.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por haber tenido motivo plausible para litigar, el Fisco no será condenado en costas.

En consecuencia y visto además la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N°19.123 y N°19.980; y, artículos 144, 170 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y de prescripción.

II.- Que acoge la demanda y se dispone que el Estado de Chile debe pagar como indemnización de perjuicios por daño moral al demandante, la suma de \$70.000.000, con los reajustes que se indican en el considerando vigésimo sexto.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dos de Agosto de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXBFXPZBTZD

